

En Logroño, a 22 de octubre de 2018, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert Pérez-Caballero, y de los Consejeros, D. José María Cid Monreal, D. Enrique de la Iglesia Palacios, D. José Luis Jiménez Losantos y D. Pedro María Prusén de Blas, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, y siendo ponente D. Enrique de la Iglesia Palacios, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

101/18

Correspondiente a la consulta formulada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en relación con la *Revisión de oficio 49/2018, de las Resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Rural y demás actos administrativos conexos, señalados en el apartado 9º de la Propuesta de resolución de 18 de julio de 2018, por los que se autorizó a Dª A.B.D.S., a plantar 5,4140 Has. en 2016, de nuevos viñedos.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja ha tramitado el procedimiento de Revisión de oficio núm. 49/2018, de cuyo expediente resultan los siguientes datos de interés.

1. Relativos al procedimiento de autorización de nuevas plantaciones del año 2016

A) El 15 de marzo de 2016, la persona interesada antes referida presentó, ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, una solicitud por la que pedía le fuera conferida una autorización administrativa para plantar cierta superficie de viña en las veinte Parcelas identificadas en su solicitud, incluidas dentro del ámbito territorial de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCR).

La solicitud se formuló al amparo del régimen jurídico que, para las nuevas plantaciones, establece el Reglamento núm. 1308/2013, de 17 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, para el periodo 2016-2030; y sus normas de desarrollo, como el Reglamento Delegado 560/2015, de 15 de diciembre de 2014, de la

Comisión; el Reglamento de Ejecución 561/2015, de 7 de abril; y -en el ámbito del Derecho interno español- el RD 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el control del potencial vitícola.

Con la solicitud, la persona interesada pretendía que se le adjudicara una autorización de nueva plantación de viñedo de las contempladas en el art. 64 del Reglamento 1308/2013, así como en los arts. 6 y ss. del RD 740/2015.

En el formulario-tipo que está anexo a la solicitud firmada por la persona interesada (formulario titulado: *Solicitud de autorización de nuevas plantaciones de viñedo – OCM 1308/2013 – Campaña Vitícola...*), la solicitante marcó todas las casillas del apartado “G”, relativo a los *criterios de prioridad*, lo que suponía que dicha persona pretendía ser encuadrada dentro del *Grupo 1* de los *criterios de prioridad* establecidos por el RD 740/2015.

B) El 2 de mayo de 2016, el Jefe del Servicio de Viñedo de la Dirección General de Desarrollo Rural propuso tramitar la concesión de la autorización de una nueva plantación de viñedo en las Parcelas indicadas por la persona interesada, e incluir a ésta en el *Grupo 1, joven, nuevo viticultor, jefe de explotación, de los criterios de prioridad del RD 740/2015*. Igualmente, de la superficie solicitada por la persona interesada, limitó la declarada admisible a efectos de reparto a 36,7113 Has. Por un lado, por considerar no admisibles 6 parcelas; y, por otro, por minorar la superficie que se atribuía a las 14 parcelas sí declaradas admisibles a efectos de reparto.

C) Con fecha 19 de mayo de 2016, y mediante correo electrónico, la persona interesada presentó escrito de alegaciones, en el que mostró su disconformidad con la superficie declarada admisible en la citada Propuesta de resolución de 2 de mayo de 2016.

D) Mediante Resolución de 7 de julio de 2016, el Director General de Desarrollo Rural confirió, a la persona interesada, una superficie plantable de 5,4140 Has, sobre una superficie finalmente declarada admisible de 46,708 Has. Esa Resolución informó de que su efectividad estaba condicionada *a la verificación de la admisibilidad de los Recintos solicitados*; debiendo, además, la persona interesada *indicar la localización concreta de la/s Parcela/s en la cual va a realizar la plantación y presentar documentación acreditativa de la disponibilidad sobre la/s misma/s*.

Por otra parte, la Resolución razonó que esa es la superficie autorizada porque supone, respecto de la declarada admisible, un porcentaje de 11,59131781 %, que es, a su vez, el que representa la superficie máxima a plantar autorizada por el Ministerio de Agricultura en la DOCR (387 Has, según Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios), respecto de la superficie total

solicitada, en ese mismo ámbito de la DOCR, por todos los petitionarios de nuevas autorizaciones de plantación de viñedos.

E) La persona interesada, por medio de escritos presentados el 21 de julio y el 1 de agosto de 2016, y en cumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2016, concretó las Parcelas, seis, en las que pretendía realizar la nueva plantación.

F) Con posterioridad, y por seis Resoluciones, de 17 de noviembre de 2016, el Director General de Desarrollo Rural, *examinada la presente solicitud y efectuadas las comprobaciones oportunas*, autorizó la plantación de las correspondientes superficies en las parcelas indicadas por la persona solicitante.

Igualmente, las Resoluciones señalaron: i) que la plantación habrá de ejecutarse, como máximo, antes del 13 de julio de 2019; ii) que, comunicada la plantación, quedará inscrita provisionalmente en el Registro de viñedo; y iii) que esa inscripción *pasará a ser definitiva en caso de contar con informe técnico favorable*.

G) El 27 de febrero de 2017, el Jefe del Servicio de Viñedo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente requiere a la persona interesada para que presente, en el plazo de diez días, *“toda la documentación que usted pueda para acreditar su actividad agraria y condición de Jefe de explotación.”*

El acuse de recibo de dicha comunicación fue suscrito por la madre de la persona interesada; y la documentación fue presentada por el tío de la persona interesada.

H) En la documentación obrante en el expediente, constan cinco comunicaciones, de 4 de junio de 2018, presentadas en relación con la finalización de los trabajos de plantación de la autorización conferida en 2016. En esas comunicaciones se señala, como fecha de finalización de los trabajos de plantación de las cinco Parcelas, el 5 de mayo de 2018.

No obstante, como se señala, esas comunicaciones se refieren solo a cinco de las seis Parcelas que habían sido identificadas por la persona interesada y cuya plantación había sido autorizada a la persona interesada por las Resoluciones de 17 de noviembre de 2016.

Según resulta del expediente remitido a este Consejo, en relación con la sexta Parcela, la persona solicitante no ha presentado comunicación alguna relativa a su plantación.

I) Los escritos de 4 de junio de 2018 no fueron presentados por la propia persona interesada, sino por su madre.

Por medio de Oficio de 17 de julio de 2018, el Director General de Desarrollo Rural puso de manifiesto esta circunstancia a la persona interesada, y le indicó que en el expediente constaba un *“poder de representación otorgado por”* ella *“en favor de”* su madre *“el pasado 30 de septiembre de 2016 en el Consulado de España en Sidney por periodo de vigencia de un año”*; pero que tal periodo había concluido ya para el 4 de junio de 2018, por lo que *“la validez de la representación concluyó el 30 de septiembre de 2017”*.

Según informa ese oficio de 17 de julio de 2018, de conformidad con el art. 5 de la LPAC'15, la presentación de comunicaciones y la formulación de solicitudes por medio de representante requiere la acreditación de la representación. Por ese motivo, el oficio confirió diez días a la persona interesada para que *“presente o bien los trámites suscritos por la interesada o representación válidamente acreditada en favor de tercero.”*

El 6 de agosto de 2018, por medio de burofax, se remitió comunicación suscrita por la persona interesada en la que ratifica las comunicaciones presentadas por su madre y explica que *“en muchas ocasiones no me encuentro de momento viviendo en Logroño”* por lo que, *“en breves fechas, voy a volver a otorgar a mi madre un nuevo poder notarial que será “con carácter indefinido”*.

2. Relativos al procedimiento de autorización de nuevas plantaciones del año 2017.

Aunque el expediente revisor núm. 49/2018 tiene únicamente por objeto los actos autorizatorios dictados en el procedimiento de nuevas plantaciones correspondiente al año 2016, resultan también de interés los antecedentes atinentes al procedimiento tramitado en el año 2017.

A) En efecto, en el año siguiente, mediante escrito fechado el 15 de marzo de 2017, la persona interesada presentó, ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, una solicitud por la que pedía que le fuera conferida una autorización administrativa para plantar 28,539 Has. de viña en diversas Parcelas identificadas en su solicitud, todas ellas incluidas dentro del ámbito territorial de la DOCR.

De nuevo, la persona interesada pretendía que se le confiriese una autorización de nueva plantación de viñedo de las contempladas en el art. 64 del Reglamento 1308/2013, así como en los arts. 6 y ss. del RD 740/2015.

Y, al igual que el año anterior, en el formulario-tipo que está anexo a la solicitud firmada por la persona interesada (formulario titulado: *Solicitud de autorización de nuevas*

plantaciones de viñedo – OCM 1308/2013 – Campaña Vitícola 2017), marcó todas las casillas del apartado “G”, relativo a los *criterios de prioridad*, lo que suponía que la persona solicitante pretendía ser encuadrada dentro del *Grupo 1* de los *criterios de prioridad* establecidos por el RD 740/2015.

La solicitud presentada el 15 de marzo de 2017 no fue firmada por la interesada sino (“P.O”) por otra persona diferente, cuya rúbrica coincide con la que, en otros documentos obrantes en el expediente (pag 61, por ejemplo), figura como perteneciente a la madre de la persona interesada.

B) Por Propuesta de resolución de 17 de mayo de 2017, el Jefe del Servicio de Viñedo de la Dirección General de Desarrollo Rural planteó tramitar la autorización de una nueva plantación de viñedo en las Parcelas indicadas por la persona interesada, y gestionar su petición como solicitante perteneciente al *“Grupo 2, solicitante que cumple los requisitos de buen comportamiento, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en el art. 10 del Real Decreto 740/2015”* y no como perteneciente al Grupo 1, dado que tras haberse *“procedido al estudio de su solicitud y de acuerdo con la documentación presentada no queda demostrado que usted sea quien asume el riesgo empresarial y sea un agricultor que esté ejerciendo la actividad agraria y/o existen posibles indicios de creación de condiciones artificiales.”*

La Propuesta de resolución le dio traslado, al mismo tiempo, de la apertura de trámite de audiencia, por término de diez días.

C) La persona interesada presentó alegaciones, fechadas el 25 y 26 de mayo de 2017, en las que manifestó, en síntesis, que deseaba *“seguir perteneciendo al grupo 1”*. A ellas, adjuntó la documentación que tuvo por conveniente. Las alegaciones se contienen, en varios documentos distintos, todos ellos total o parcialmente manuscritos. Aunque en todos ellos se hace constar, como persona que los suscribe, el nombre de una única persona (la solicitante), los tipos de letra que figuran en esos manuscritos no parecen ser iguales.

D) Por Resolución de 6 de agosto de 2018, el Director General de Desarrollo rural, desestima la solicitud de nuevas plantaciones formulada por la persona interesada en el seno del procedimiento autorizatorio de 2017, al entender que la documentación, presentada por la persona interesada, pone de manifiesto que, en realidad, carece de la condición de Jefe de una explotación agrícola, por lo que no pertenece al Grupo 1 de reparto, y que *“en el presente caso, se han creado artificialmente las condiciones con el propósito de obtener un beneficio en el reparto”*.

La Resolución desestimatoria fue notificada el 18 de junio de 2018, firmando el acuse de recibo de la notificación la misma persona que -“P.O.”- había suscrito la solicitud en nombre de la persona interesada.

E) Entre la documentación remitida a este Consejo Consultivo no consta dato alguno relativo a si la interesada ha promovido algún recurso administrativo o contencioso administrativo contra ese acto administrativo denegatorio.

3. Simultáneamente al examen de la solicitud formulada por la interesada en el seno del procedimiento autorizatorio del año 2017, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja contrastó los datos afirmados en las dos solicitudes que, ya para entonces, había presentado (en 2016 y en 2017) la persona interesada (tanto los atinentes a sus condiciones personales y a su explotación agraria, como los referentes a las Parcelas que fueron consideradas admisibles), con los datos obrantes en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y los resultantes de la documentación aportada por la propia persona interesada.

Así, en los documentos denominados *Ficha de control REA*, de 5 de junio de 2018; *Ficha de control de arrendamientos y otras consideraciones REA*, de 5 de junio de 2018; y *Ficha de control de expedientes*, de 6 de mayo de 2018, se analizan un conjunto de circunstancias atinentes a: **i)** la evolución de la explotación agrícola en el periodo que va desde 2014 hasta la actualidad; **ii)** los datos generales de la explotación (edad de la persona titular, formación, licencia para la aplicación de productos fitosanitarios, maquinaria inscrita a su nombre, seguros agrarios suscritos, cuadernos de explotación cumplimentados); **iii)** el régimen de tenencia de las Parcelas que presenta como admisibles y explotaciones de procedencia de las Parcelas o Recintos de la explotación; **iv)** las relaciones de la persona titular con la Seguridad Social (alta o no en el Régimen correspondiente de Seguridad Social y vida laboral); **v)** las relaciones de la persona titular con la AEAT (aportación, o no, de alta censal, declaración de IRPF en 2015 y 2016, fechas de presentación de modelos tributarios 037 relativos a inicio de la actividad); **vi)** facturas de gastos e ingresos relacionados con los cultivos y labores de cultivos de la explotación y ajenos a ellos; y **vii)** aportación, o no, del cuaderno de explotación (CUEX).

Sobre la base de esos datos, que figuran pormenorizadamente detallados en los folios 232 a 263 del expediente, se emite, el 16 de junio de 2018, un informe de Recomendaciones y consideraciones finales (folios 264 a 270 del expediente), del que resultan, entre otros, y junto con los documentos anteriores, los siguientes datos:

-La persona solicitante, de 30 años, es titular de una explotación, no catalogada como prioritaria, surgida en el año 2016, coincidiendo con la tramitación del primer procedimiento de autorización de nuevas plantaciones, con una superficie de 59,0631 Has. De esa superficie, la mayoría (40,2409 Has) corresponde a barbecho tradicional; y el resto a trigo blando (3,3439 Has), olivo (0,4039 Has),

cebada (2,1266 Has), almendros (2,0075 Has), esparceta (9,3000 Has), nogal (0,2 Has), espárragos (0,60 Has) y nectarinas (0,1696 Has).

-La persona interesada no reside en España, sino en una ciudad australiana. Así consta, según sus propias manifestaciones, en el documento de apoderamiento, otorgado, el 30 de septiembre de 2016, ante el Cónsul General de España en Sidney (Australia), en el que la persona interesada manifiesta tener su domicilio en la ciudad de Summer Hill (Nueva Gales del Sur); y conferir poder general en favor de su madre.

-En el año 2017, la explotación, que había alcanzado en el año 2016 más de 59 Has, se redujo a menos de la mitad (24,12 Has); y, en junio de 2018 (fecha de la emisión del informe de recomendaciones elaborado por la Consejería de Agricultura), a 13,84 Has, de las que 5,024 Has corresponde al viñedo que le fue autorizado en el año 2016, y que fue plantado -según las comunicaciones remitidas por la persona interesada a la Consejería de Agricultura el 4 de junio de 2018- en mayo de 2018.

-En cuanto al régimen de tenencia de la superficie integrantes de su explotación, esta procede, íntegramente, de cinco contratos de arrendamiento suscritos por la persona interesada en enero de 2016 y liquidados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el mes de abril de 2016; y de un sexto contrato, cuya fecha no consta, pero que fue liquidado en abril de 2017. Todos ellos por cinco años de duración y por una renta de 30 euros/Ha. Los arrendadores son cinco personas. Todas ellas unidas por vínculos familiares con la persona solicitante: su madre, su abuela, un tío y dos hermanos de un abuelo. Todos ellos son mayores de cuarenta años y titulares de viñedo inscrito.

-En los contratos de arrendamiento suscritos por la madre, esta afirma ceder a ésta *“todos los derechos para cubrir su solicitud PAC”*.

-Respecto a la campaña 2016, la persona solicitante cobró ayudas por Pago Básico y Pago Verde. En el año 2017, también la Ayuda nacional a Frutos Cáscara.

-La persona declarante no posee carnet de aplicador de fitosanitarios. Tampoco maquinaria inscrita en el ROMA.

-Buena parte de los documentos, comunicaciones y solicitudes formuladas en nombre de la persona interesada han sido suscritos o por su madre (acuses de recibo de notificaciones, solicitud correspondiente al año 2017) o por su tío (aportación de documentación en contestación al requerimiento formulado por la Consejería de Agricultura el 28 de febrero de 2018).

-Todas las facturas de ingresos y gastos que presenta la persona interesada son posteriores al procedimiento de nuevas plantaciones correspondiente al año 2016.

-Por lo que hace a los ingresos del ejercicio 2016, estos suman 2.500 euros, por tres únicas facturas: dos, por venta de 500 kg de almendra (la explotación declara a lo largo de 2016 más de 2 Has de almendra, pero sólo aparecen cultivadas 0,25 Has); y 1800 euros, por la venta de esparceta a una persona que es su tío abuelo y arrendador de 5 Has.

-En cuanto a los gastos, presenta una factura de combustible (por importe de 546,16 euros), que sería el *“resumen del consumo agrario durante todo el año 2016”* según la propia persona interesada. Sin embargo, su explotación carece de maquinaria propia y el vehículo al que correspondería ese

combustible (según lo identifica la persona interesada en sus alegaciones) se encuentra dado de baja desde el año 2002.

-Como únicos gastos adicionales, se aportan tres facturas por compra de abono (una) y material vegetal (dos), por importe total inferior a 1.300 euros.

-Correspondientes al año 2017, la persona interesada presenta las mismas facturas que ya había aportado en relación con el ejercicio 2016, salvo tres más, todas de escasa cuantía: dos, de gastos, por 241,11 euros, y 290,40 euros, respectivamente; y, una, de ingresos, por 399,99 euros.

-La persona interesada no ha presentado el Cuaderno de Explotación.

-La persona solicitante, que no tiene cursos de formación inscritos en el REA, ni ha contratado ningún seguro agrario, figura en el Registro de la DOC Rioja (es titular de viñedo inscrito, desde 2018), sin que conste su inscripción en ningún otro Registro específico o marca de calidad.

-La persona interesada no ha acreditado estar inscrita en el Régimen correspondiente de Seguridad Social, ni ha presentado el documento oficial acreditativo de su vida laboral.

-Tampoco ha aportado el modelo censal relativo al alta en la pertinente actividad económica (Modelo 037 de la AEAT), ni las declaraciones del IRPF de 2015 y 2016.

Segundo

1. En vista de las circunstancias indicadas, el 25 de junio de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja dictó una Resolución por la que se incoa el procedimiento de revisión de oficio núm. 49/2018, de las siguientes actuaciones administrativas, que se concretan en el Fundamento Jurídico Octavo de la misma:

i) la Resolución, de fecha 7 de julio de 2016, dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Desarrollo Rural, mediante la que se (autoriza, a la persona interesada, para plantar) una superficie total de 5,4140 Has, con base en una superficie declarada admisible de 46,708 Has.

ii) las seis Resoluciones de 17 de noviembre de 2016, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se le autoriza la plantación en otras tantas Parcelas (las identificadas por la persona interesada), de una superficie total de 5,4140 Has.

La misma Resolución de 25 de junio de 2018 dispuso: **i)** suspender la vigencia de las autorizaciones administrativas otorgadas; **ii)** practicar en el Registro riojano de viñedos, las anotaciones preventivas correspondientes; **iii)** declarar que todo ello debía entenderse “sin perjuicio de que el interesado pueda renunciar a la superficie concedida (...) y en coherencia arrancar el viñedo indebidamente plantado”; y **iv)** conferir traslado a

la persona interesada para que, en plazo de diez días, formulase las alegaciones que considerase oportunas.

2. En el plazo otorgado al efecto, la persona solicitante formuló un escrito de alegaciones, presentado el 11 de julio de 2018, al que adjuntó la documentación que tuvo por conveniente.

3. Con fecha 18 de julio de 2018, el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería actuante emitió la Propuesta de resolución, en el sentido de declarar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones objeto del procedimiento revisor; y recabar el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja.

4. Por medio de informe de 6 de septiembre de 2018, los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja se pronuncian en sentido favorable a la Propuesta de revisión de oficio, y consideran que las autorizaciones administrativas concedidas incurren en la causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 (actualmente, del art. 47.1.f) de la Ley 39/2015), que declara nulos de pleno Derecho los actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, pues la persona solicitante obtuvo autorizaciones administrativas sin cumplir los requisitos esenciales para su obtención.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito firmado, enviado y registrado de salida electrónicamente con fecha 3 de octubre de 2018, y registrado de entrada en este Consejo el 4 de octubre de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, remitió, al Consejo Consultivo de La Rioja, para dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

El Sr. Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja, mediante escrito, firmado, enviado y registrado de salida electrónicamente el 5 de octubre de 2018, procedió, en nombre de dicho Consejo, a acusar recibo de la consulta, a declarar provisionalmente la misma bien efectuada, así como a apreciar la competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la sesión del Consejo Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo

El carácter preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo en los casos de revisión de los actos administrativos resulta, con toda claridad, de lo dispuesto en el art. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC'15), a cuyo tenor: *las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.*

Reiteran la necesidad del dictamen del Consejo Consultivo en estos casos nuestra Ley reguladora (Ley 3/2001, de 31 de mayo, art. 11.f) y el Reglamento que la desarrolla (aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero art. 12.2.f).

Por lo demás, como claramente se infiere del art. 106.1 LPAC'15, el dictamen del Consejo Consultivo en materia de revisión de actos administrativos es, además de preceptivo, habilitante de la ulterior decisión revisora de la Administración, que sólo puede declarar la nulidad del acto si dicho dictamen hubiere sido favorable, esto es, estimatorio de la nulidad denunciada.

Segundo

Sobre la nulidad de pleno Derecho de las Resoluciones de 7 de julio y 17 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural

1. El concepto de *requisito esencial*

El art. 47.1.f) LPAC'15 dispone que son nulos de pleno derecho *los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.*

A) La jurisprudencia y la doctrina han insistido, con reiteración, en la necesidad de interpretar restrictivamente los preceptos que tipifican las causas de nulidad de los actos administrativos. Y ello, porque la categoría jurídica de la *nulidad de pleno Derecho* es, dentro de la teoría de la invalidez del acto administrativo, una excepción frente a la *anulabilidad*, que constituye, a su vez, la consecuencia prevista, como regla general, para los supuestos en que un acto administrativo contraviene el ordenamiento jurídico (art. 48.1 LPAC'15).

Así lo han señalado, entre otros muchos, el Dictamen del Consejo de Estado (DCE) 485/2012, de 24 de mayo, y los en él citados.

Por ese mismo carácter excepcional de la nulidad de pleno Derecho, en la aplicación del art. 47.1.f) LPAC'15 (y de su precedente, el art. 62.1.f, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, LPAC'92) la jurisprudencia y la doctrina han trazado un concepto sumamente estricto de lo que debe entenderse por *requisitos esenciales* cuya ausencia determina la nulidad radical de los actos administrativos atributivos de derechos o facultades.

A pesar de la dificultad de establecer un criterio interpretativo general en una materia que, por su propia naturaleza, es esencialmente casuística, pueden señalarse, como orientaciones generales, que solamente son requisitos esenciales *los auténticos presupuestos que explican y justifican la adquisición del derecho o facultad de que se trate* (DCE 845/2013), o, en palabras del DCE 2.741/2010, *los relativos a la estructura definitiva del acto.*

Por otra parte, la calificación de un requisito como *esencial* ha de ceñirse *al objeto, causa y fin del acto administrativo de que se trate* (DCE 461/2009); añadiendo el DCE 485/2012 que *la esencialidad presupone que ha de tratarse de un requisito que objetivamente el interesado no puede llegar a cumplir en ningún momento, por tratarse de un hecho acontecido invariable que elimina cualquier posibilidad de subsanación, y*

que no precisa, para constatar su carencia, de la interpretación de norma jurídica alguna.

En iguales términos, la Sala 3ª del Tribunal Supremo (TS) ha indicado que *no todos los requisitos necesarios para ser titular de un derecho pueden reputarse 'esenciales': tan sólo los más significativos y, directa e indisociablemente, ligados a la naturaleza misma de aquél* (STS 26-11-2008, R.Cas 1988/2006).

Esta misma idea la ha expresado el Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 585/2011) al señalar que la expresión *requisito esencial* de un acto administrativo debe reservarse a *aquellos que le son realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la finalidad perseguida por la norma infringida, de modo que el acto en cuestión tiene efectos radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma*.

B) Por nuestra parte y en la misma línea, hemos perfilado esta doctrina, sosteniendo en diversos dictámenes: i) que hay que reconocer la dificultad de establecer un criterio interpretativo general en una materia que, por su propia naturaleza, es esencialmente casuística (D.44/17); y ii) que no todos los requisitos para la adquisición de una facultad o derecho merecen la calificación de *esenciales*, pues, como ha señalado el Consejo de Estado (DCE 3491/99), una interpretación amplia de los mismos comportaría fácilmente una desnaturalización de las causas legales de invalidez, por cuanto la carencia de uno de ellos determinaría la nulidad de pleno Derecho, vaciando de contenido no pocos supuestos de simple anulabilidad, lo que representaría un grave peligro para la seguridad jurídica (D.96/10, D.40/11, D.44/11 y D.44/17).

Por tanto, en nuestro criterio, la *esencialidad* de los requisitos debe: i) referirse al sujeto que realiza o al objeto sobre el que recae la actividad; ii) ser incontrovertible; iii) afectar a un acto que determine el nacimiento de un derecho o una facultad en el sujeto, como sucede en los nombramientos y las concesiones, o que posibilite la efectividad de uno que el sujeto ya tenía, como ocurre en el caso de las autorizaciones; y iv) quedar reservada para los requisitos más básicos y significativos que estén, directa e indisociablemente, ligados a la naturaleza misma del derecho o facultad adquiridos, como son los que determinan, en sentido estricto, la adquisición del derecho o facultad de que se trate (D.96/10, D.40/11, D.44/11 y D.44/17, entre otros).

Esta doctrina conlleva: i) que el art. 47.1.f) LPAC'15 (como antes el art. 62.1.f) LPAC'92) debe ser objeto de una interpretación *estricta*, para evitar una interpretación extensiva y amplia de los requisitos esenciales (D.40/11, D.44/11 y D.44/17, entre otros); y ii) que debe distinguirse entre requisitos *esenciales* y meramente *necesarios*, pues sólo los primeros pueden fundar una declaración de nulidad de pleno Derecho (D.96/10, D.40/11 y D.44/11).

En aplicación de estos criterios, hemos dictaminado que concurre esta causa de nulidad de pleno Derecho en múltiples casos de autorizaciones para plantar viñedos conferidas a personas que carecían de los requisitos esenciales para obtenerlas: i) por carecer de la titularidad privada de los derechos de plantación exigibles para realizar replantaciones de viñedo (D.32/99, D.37/99, D.38/99, D.11/01, D.17/01, D.46/01, D.40/02, D.42/02, D.56/02, D.59/02, D.29/05, D.34/05, D.35/05, D.40/05, D.41/05, D.43/05, D.45/05, D.60/05, D.61/05, D.67/05, D.73/06, y D.78/07, entre otros); o ii) por presentar al efecto derechos de plantación ficticios e inexistentes (D.43/14, D.46/14, D.49/14, D.51/14, D.55/14, D.57/14, D.59/14, D.60/14, D.66/14, D.2/15, D.5/15, D.6/15, D.7/15, D.8/15, D.9/15, D.11/15, D.25/15, D.31/15, D.32/15, D.36/15, D.41/15, D.42/15, D.43/15, D.44/15, D.45/15, D.46/15, D.32/17, D.36/17, D.38/17 y D.43/17, entre otros).

Y hemos aclarado, además, que dicha nulidad se produce prescindiendo por completo del modo fraudulento en que, en su caso, se lograra aparentar, en el caso de autorizaciones para plantar de viñedo, la previa inscripción de las viñas en el Registro de viñedo y su ulterior y ficticio arranque (D.43/14, D.46/14, D.49/14, D.51/14, D.55/14, D.57/14, D.59/14, D.60/14, D.66/14, D.2/15, D.6/15, D.7/15, D.8/15, D.9/15, D.11/15, D.25/15, D.31/15, D.32/15, D.36/15, D.41/15, D.42/15, D.43/15, D.45/15, D.46/15, D.32/17, D.36/17, D.38/17 y D.43/17, entre otros).

2. El bloque normativo aplicable

Para proyectar las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, es preciso analizar el bloque normativo que disciplinó la producción de los actos administrativos cuya revisión se pretende, y determinar la razón de ser de la condición -incumplida por la persona interesada- de ser *joven nuevo viticultor y jefe de explotación*, así como la consecuencia jurídica que debe anudarse a la ausencia de esa condición.

A) El Reglamento núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios y se derogan los Reglamentos CEE núms. 922/72, 234/79, 1037/2001 y 1234/2007, establece un nuevo régimen de autorizaciones para las plantaciones de vid para el periodo 01-01-2016 a 31-12-2030 (arts. 61 y ss.).

En lo que hace al caso, este nuevo Reglamento -aunque modifica aspectos sustanciales de la normativa comunitaria anterior- mantiene, sin embargo, la premisa básica de que la plantación de viñedos está, como regla general, prohibida, y que esa prohibición sólo puede exonerarse mediante la obtención de una previa autorización administrativa (art. 62.1 del Reglamento 1308/2013).

En tal sentido, nos remitimos a la doctrina sentada por este Consejo Consultivo en numerosos dictámenes (por todos, D.43/14, D.46/14 y los en ellos dictados). En particular,

hemos analizado el nuevo régimen jurídico de plantaciones de viñedo encabezado por el Reglamento UE 1.308/2013 en nuestros dictámenes D.41/16 y D.6/2017, relativos, respectivamente, a la actual Ley autonómica 1/2017, de 3 de enero, de Control del potencial vitícola de La Rioja, y a su Reglamento, aprobado por Decreto 4/2017, de 3 de febrero.

Pues bien, de entre los diferentes mecanismos autorizatorios contemplados por el vigente Derecho Comunitario, los arts. 63 y 64 del Reglamento 1.308/2013 regulan la concesión de *autorizaciones para nuevas plantaciones*. Y así, en lo que interesa al caso, los Estados miembros *pondrán a disposición, cada año, autorizaciones para nuevas plantaciones*, cuya superficie total estará necesariamente limitada (art. 63). En principio, esa nueva superficie plantable será la correspondiente *al 1% de toda la superficie realmente plantada con vid en su territorio, calculada el 31 de julio del año anterior* (art. 63.1), sin perjuicio de las matizaciones que, a esa regla general, se establecen en el propio art. 63. En cualquier caso -se insiste-, la nueva superficie plantable es siempre limitada.

B) En la medida en que las nuevas superficies susceptibles de ser autorizadas son limitadas, el art. 64 del Reglamento 1308/2013 determina que los Estados miembros establecerán -dentro del marco del propio art. 64- criterios *de admisibilidad* de las solicitudes; y *de prioridad* entre las que hayan sido admitidas.

Naturalmente, si, en un Estado miembro y en un año concreto, la superficie total cubierta por las solicitudes admisibles no excede de la superficie puesta a disposición en ese año, todas las solicitudes serán aceptadas y se conferirán todas las autorizaciones (art. 64.1).

Pero, en el caso contrario (esto es, si la superficie total cubierta por las solicitudes admisibles supera a la superficie que ha sido puesta a disposición), *las autorizaciones se concederán, de acuerdo a una distribución proporcional de hectáreas, a todos los solicitantes, sobre la base de la superficie para la que hayan solicitado la autorización. También podrá procederse a dicha concesión, parcial o totalmente, de acuerdo con uno o varios de los siguientes criterios de prioridad objetivos y no discriminatorios*.

Entre tales criterios de *prioridad*, que el precepto enumera (art. 64.2) y que los Estados miembros, una vez los han seleccionado, han de hacer públicos y comunicar a la Comisión (art. 64.3), se encuentra el de que *los productores planten vides por primera vez y estén establecidos en calidad de jefes de la explotación* (nuevos viticultores) (art. 64.2, a), del Reglamento 1308/2013).

Por su parte, este criterio, descrito por el art. 64.2, a) del Reglamento 1308/2013, ha sido desarrollado por el Reglamento Delegado 560/2015, de la Comisión (Anexo II.A), el

cual, entre otras previsiones, define cuándo una persona cumple el criterio de ser nuevo viticultor, es decir plantar vides por primera vez y ser jefe de explotación:

En lo que hace a las personas físicas, sólo se cumple este criterio si también se cumple la condición señalada en el Anexo II,A.1.a) del Reglamento Delegado 560/2015, de que:

Una persona física que está plantando vides por primera vez y está establecida en calidad de jefe de explotación (nuevo viticultor) ejerce un control, efectivo y a largo plazo, sobre la persona jurídica, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros; cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean nuevos viticultores, participen en el capital o la gestión de la persona jurídica, el nuevo viticultor estará en condiciones de ejercer ese control efectivo y a largo plazo por sí solo o conjuntamente con otras personas.

Por otro lado, el citado Anexo II,A): i) enfatiza que *las condiciones establecidas en las letras a) y b) del párrafo primero serán aplicables, mutatis mutandis, al grupo de personas físicas, independientemente del estatuto jurídico que conceda la legislación nacional a ese grupo y a sus miembros*; y ii) permite a los Estados miembros *imponer la condición suplementaria de que el solicitante sea una persona física que, en el año de la presentación de la solicitud, no tenga más de 40 años (joven productor).*

En fin, junto a ese *criterio de prioridad*, se describen otros muchos. Por ejemplo, que los viñedos para los que se pida autorización contribuyan a la *preservación del medio ambiente*, o que se establezcan en superficies con *limitaciones específicas naturales*, entre otros.

Lo relevante aquí es reparar en el hecho de que estos *criterios de prioridad* constituyen un instrumento encaminado a que los Estados miembros hagan efectivas sus respectivas orientaciones de política agraria pues, mediante esos *criterios de prioridad*, los Estados darán preferencia, al conferir nuevas autorizaciones, a unos u otros tipos de solicitantes, según las circunstancias objetivas (su condición de *joven y nuevo viticultor*, por ejemplo) que en ellos concurren.

Por ello, a través de la concreción definitiva de esos *criterios de prioridad*, los Estados miembros (en este caso, el Reino de España), seleccionan los grupos de viticultores que consideran de interés prevalente o preferente por razones de política agraria; selección que, en definitiva, constituye la expresión de los intereses generales que se pretenden promover, proteger o tutelar al conferir autorizaciones administrativas sobre las nuevas superficies plantables.

El propio Derecho comunitario ha establecido mecanismos específicos para salvaguardar la efectividad de esos objetivos de la legislación agrícola sectorial. Así, el

art. 60 del Reglamento 1306/2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria Común (PAC), bajo la rúbrica *Cláusula de elusión*, dispone que:

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, no se concederá ninguna ventaja prevista en la legislación agrícola sectorial a personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener esas ventajas, contrarias a los objetivos de dicha legislación.

C) Por su parte, el art. 3 del Reglamento de Ejecución 561/2015 habilita a los Estados miembros, no sólo a establecer los *criterios de prioridad*, sino también a *atribuir una importancia diferente a cada uno de los diferentes criterios de prioridad elegidos*, de forma que *tales decisiones permitirán a los Estados miembros establecer un orden de prioridad de las solicitudes individuales a nivel nacional...*, sobre la base del cumplimiento de estas solicitudes de los criterios de prioridad elegidos.

De nuevo, el art. 6 del Reglamento 561/2015 distingue entre los supuestos en que la superficie solicitada y admisible sea inferior a la puesta a disposición por cada Estado (en cuyo caso, *los Estados miembros concederán las autorizaciones para toda la superficie solicitada por los productores*); y el caso contrario, en el que ha de aplicarse los procedimientos de selección regulados en el Anexo I del citado Reglamento.

Esos procedimientos pueden suponer la asignación de superficies por *criterios de mera proporcionalidad* (Anexo I.A) y también *con arreglo a los criterios de prioridad* (Anexo I.B).

En este segundo supuesto, y en síntesis, los Estados miembros atribuirán, a cada uno de esos criterios, una determinada ponderación o valor; y confeccionarán una lista que ordene las solicitudes presentadas y admisibles, conforme a la puntuación total obtenida por cada solicitante en aplicación de esos criterios (Anexo I.B.c).

A partir de ahí, la citada norma dispone que: i) *los Estados miembros concederán las autorizaciones a los solicitantes individuales, siguiendo el orden establecido en la lista mencionada en la letra c) y hasta el agotamiento de las hectáreas que vayan a asignarse, de acuerdo con los criterios de prioridad*; ii) *se concederá, en forma de autorizaciones, el número total de hectáreas requerido por el solicitante, antes de conceder una autorización al siguiente solicitante en la clasificación*; y iii) *en caso de que las hectáreas disponibles se agoten en una posición de la clasificación en la que varias solicitudes tengan el mismo número de puntos, las hectáreas restantes se asignarán de manera proporcional entre estas solicitudes*.

D) La concreción y desarrollo de estas previsiones en el Derecho interno español se realizó, inicialmente, mediante el RD 740/2015, de 31 de julio, luego derogado por el RD 772/2017, de 28 de julio, actualmente vigente.

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR), se dictó el Decreto 86/2015, de 2 de octubre, por el que se regula la adaptación del control del potencial vitícola de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) 1.308/2013. Actualmente, el Decreto 86/2015 ha quedado derogado por la Ley 1/2017, de 3 de enero, de Control de potencial vitícola de La Rioja, y sustituido por el Decreto 4/2017, de 3 de febrero.

Los procedimientos para autorizar nuevas plantaciones, tramitados por la CAR, se han regido por el RD 740/2015: el procedimiento correspondiente al año 2016, por la redacción originaria del RD 740/2015; y, el relativo a 2017, por la versión del RD 740/2015 resultante de la modificación operada por el RD 313/2016, de 29 de julio, vigente desde el 1 de agosto de 2016 (DF Única).

En el presente dictamen, se transcriben los preceptos originales del RD 740/2015 (esto es, los vigentes antes de la reforma del año 2016), aunque las modificaciones introducidas luego por el RD 313/2016 carecen de relevancia práctica a efectos de este dictamen.

Pues bien, como enseguida vamos a ver, el RD 740/2015 es coherente con el marco normativo comunitario que acabamos de examinar, y distingue entre los *requisitos de admisibilidad* de las solicitudes y los *criterios de prioridad* para ordenarlas.

E) En cuanto a los *criterios de admisibilidad de solicitudes*, el art. 8 del RD 740/2015 dispone que:

“Para que una solicitud sea considerada admisible, el solicitante tendrá a su disposición, por cualquier régimen de tenencia, la superficie agraria para la que se solicita la autorización en la Comunidad Autónoma que se va a plantar. La verificación de la disposición sobre la superficie se realizará en el momento de la presentación de la solicitud y en el momento de la comunicación de la plantación, que el solicitante deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 del artículo 11”.

Por otro lado, establece que *la autoridad competente verificará dicha circunstancia, al menos, en el momento de la presentación de la solicitud y en el momento de la mencionada comunicación de la plantación*; y señala que, para la comprobación de dicho criterio de admisibilidad, las Comunidades Autónomas tendrán en cuenta, entre otros, el Registro General de la Producción Agrícola, regulado por el RD 9/2015, de 16 de enero, y cualesquiera Registros que tengan dispuesto en los que pueda ser comprobado ese requisito. Incluso, *en casos debidamente justificados, en especial cuando se constate más de un solicitante sobre la misma Parcela, se podrá tener en cuenta otra documentación que verifique que el solicitante de la autorización cumple con el criterio.*

Como es evidente, todos estos mecanismos de control se ordenan a garantizar que las superficies que se pretenden plantar de viñedo sean, realmente, admisibles en tanto que aptas para dicho fin; pero también a hacer efectiva la *cláusula de elusión* prevista por el art. 60 Reglamento 1306/2013; pues, con ese control, se trata de evitar que un solicitante, mediante un incremento ficticio de la superficie disponible (base de cálculo), pueda obtener (por aplicación del porcentaje correspondiente en caso de insuficiencia de superficie suficiente para todos los solicitantes), una autorización administrativa para plantar una superficie mayor de la que realmente le hubiera debido corresponder.

F) El RD 740/2015, además, establece y concreta los *criterios de prioridad* con arreglo a los cuales se ordenarán todas las solicitudes admisibles (arts. 9.3 y 10). En este sentido, el RD 740/2015, además de determinar *cuáles sean* esos criterios (art. 10), fija la *ponderación relativa* que se asigna a cada criterio, atribuyendo, a cada uno, una determinada puntuación (Anexo III).

-Entre esos *criterios de prioridad*, para la elaboración de la lista a que se refiere el art. 9.3, el art. 10.a) desarrolla el concepto de **joven nuevo viticultor**, contemplado en el art. 64.2.a) del Reglamento 1308/2013, y lo hace del modo siguiente, exigiendo (las negritas son nuestras):

*Que el solicitante sea una persona, física o jurídica, que, en el año de la presentación de la solicitud, **no cumpla más de 40 años y sea un nuevo viticultor.***

*Conforme a la letra a) del apartado 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, se entenderá como **nuevo viticultor la persona que plante vides por primera vez y esté establecido en calidad de jefe de explotación.***

*Para la comprobación del requisito sobre la **plantación por primera vez**, en el momento de la apertura del plazo de solicitudes se comprobará que **el solicitante no ha sido titular de ninguna Parcela de viñedo en el Registro vitícola.***

*Para la comprobación de la condición del solicitante como jefe de explotación, se deberá comprobar que, en el momento de apertura del plazo de solicitudes, **el solicitante es quien está asumiendo el riesgo empresarial de su explotación.** Para ello, se deberá presentar la documentación que permita verificar que es titular de los libros de registro y de explotación establecidos en base a la normativa sectorial específica.*

*Se considerará que una persona jurídica, independientemente de su forma jurídica, cumple este criterio de prioridad si reúne alguna de las condiciones establecidas en los puntos 1) y 2) del apartado A del Anexo II del Reglamento Delegado (UE) núm. 560/2015, de la Comisión. A estos efectos, se entenderá que **un solicitante nuevo viticultor ejerce el control efectivo sobre la persona jurídica cuando las acciones o participaciones del mismo supongan, al menos, un capital social igual o superior que el del socio con mayor participación y, además, forme parte de su junta rectora u órgano de gobierno.***

*En virtud del punto 3) del apartado A del Anexo II del Reglamento Delegado (UE) núm. 560/2015, de la Comisión, el solicitante se deberá comprometer durante un plazo de cinco años desde la plantación del viñedo **a no transferir** a otra persona o a otras personas **el ejercicio del control efectivo y a largo plazo de la explotación, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros**, a no ser que esa persona o personas reúnan las condiciones de los puntos 1) y 2) de dicho apartado que eran de aplicación en el momento de la concesión de autorizaciones.*

Los compromisos requeridos en este apartado sólo serán tenidos en cuenta en caso de que, en el año en que se presenta la solicitud, no hubiera suficiente superficie disponible para todas las solicitudes admisibles y hubiera, por tanto, que aplicar los criterios de prioridad.

-El art. 10,a) del RD 740/2015 describe el concepto de **jefe de explotación** de modo coherente a como lo hace el Anexo II.A.1 del Reglamento Delegado 560/2015. Y es que, en línea con el Anexo citado, cuando el art. 10,a) RD 740/2015 exige para merecer la calificación de *joven nuevo viticultor*, el requisito de ser *jefe de explotación*, dota explícitamente a ese concepto de un contenido decididamente material y económico, dado que, para tener tal condición, no basta con que una persona ostente la mera titularidad formal, aparente o fiduciaria, de una explotación agrícola; sino que sólo puede ser considerado como *jefe de explotación* quien realmente *está asumiendo el riesgo empresarial de su explotación*, exigencia que el Anexo II.A.1 del citado Reglamento Delegado 560/2015 expresa aludiendo a quien *ejerce un control, efectivo y a largo plazo, sobre la persona jurídica, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros*, debiendo recordarse, por obvio que resulte, que lo propio de cualquier actividad empresarial es la asunción, por su titular, del riesgo económico inherente a la, mejor o peor, marcha de las operaciones económicas que se desarrollen en el mercado por virtud de esa actividad.

-A partir de ahí, y en plena congruencia con el ordenamiento comunitario, el art. 11.1 del RD 740/2015 señala que, una vez ordenadas la solicitudes admisibles por su orden de puntuación: i) *a cada solicitud con mayor puntuación, se le concederá toda la superficie solicitada, antes de pasar a la siguiente solicitud, hasta que se agote la superficie disponible*; y ii) *a las solicitudes con una misma puntuación, para cuyo conjunto no hubiera suficiente superficie disponible para satisfacer la superficie solicitada, se les repartirá, la superficie disponible, a prorrata, tal y como está definido en el Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561, de la Comisión.*

Estas previsiones se aplican igualmente en caso de que se haya limitado la superficie disponible para autorizaciones en zonas geográficas delimitadas de una Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida específica, en virtud de la decisión del apartado 4 del artículo 6, y la superficie solicitada en dichas zonas sea superior a la superficie máxima fijada para esa zona según el artículo 6. (art. 11.2 del RD 740/2015).

G) A modo de conclusión, del marco normativo examinado hasta aquí, se desprende:

-Que la plantación de nuevas superficies de viñedo está sujeta a una prohibición general, que sólo puede ser absuelta o exonerada, en lo que hace al caso, mediante la obtención de una autorización administrativa.

-Que, tratándose de las autorizaciones para *nuevas plantaciones* de viñedo, las superficies que pueden ser autorizadas son necesariamente *limitadas* (arts. 63 y 64 Reglamento 1.308/2013).

-Que, cuando la superficie total *solicitada* por todos los participantes en el procedimiento de autorización es superior a la superficie total *autorizable*, los Estados miembros pueden establecer un orden de prelación entre unos solicitantes y otros, mediante la fijación y ponderación de diferentes *criterios de prioridad*.

-Que, cuando los Estados miembros establecen esos criterios, sólo pueden ser adjudicatarios de autorizaciones de nuevas plantaciones aquellos solicitantes que, por su grado de cumplimiento de los criterios de prioridad, tengan *puntuación suficiente* para ello, ya que los demás deben quedar excluidos.

-Que esta exclusión es una *consecuencia necesaria y automática* del hecho de que la nueva superficie plantable sea limitada.

H) En cuanto a la normativa aplicable al procedimiento administrativo de revisión de oficio, debemos recordar que es la contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC'15), pues su DT 3ª, b) establece que los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de su entrada en vigor (que se produjo el 2 de octubre de 2016, según su DF 7ª) se sustanciarán por las normas establecidas en dicha Ley 39/2015.

3. El requisito de ser *joven nuevo agricultor y jefe de explotación*

A) Pues bien, como resulta de un examen conjunto del art. 10 y del Anexo III del RD 740/2015, el criterio de prioridad más relevante en el Derecho español, sin duda, es el de que el solicitante sea un *joven nuevo viticultor*.

Y ello porque, además de que, a tal criterio, se le atribuyen, *per se*, 10 puntos, de un total de 20; el art. 10.a) del RD 740/2015 describe esa figura de modo tal que el cumplimiento de los requisitos señalados por el precepto (plantar vides por primera vez, no tener más de 40 años y ser el jefe de una explotación agrícola), entraña también que el *joven nuevo viticultor* se halle en el supuesto de hecho propio de los demás criterios de

prioridad (no tener plantaciones sin derecho de plantación, no haberle vencido ninguna autorización, no tener plantaciones de viñedo abandonadas, o no haber incumplido compromisos a que estuvieran sujetas autorizaciones previas).

En definitiva, conforme al baremo contenido en el Anexo III del RD 740/2015 (tanto en su redacción originaria, como en la resultante del RD 313/2016), todo *joven nuevo viticultor* alcanza la puntuación máxima de 20 puntos.

En el caso que nos ocupa y respecto al **año 2016** (y como indica la Resolución de 7 de julio de 2016, del Director General de Desarrollo Rural), en el ámbito territorial de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCR), fue declarada autorizable una superficie total de 387 Has, mediante Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE del 30).

Sin embargo, la superficie admisible solicitada por los interesados del denominado *Grupo 1* (esto es: el de los *jóvenes nuevos viticultores*, que tenían 20 puntos) ya rebasaba ampliamente esa superficie máxima autorizable, por lo que el Ministerio de Agricultura, según recoge la citada Resolución de 7 de julio de 2016, informó a la CAR de que, a cada uno de los solicitantes pertenecientes a ese *Grupo 1*, en aplicación de la *regla de prorrata* establecida en el art. 11 RD 740/2015, no podría concedérseles autorización, sino para un 11,59131781 % de la superficie admisible solicitada por cada uno de ellos.

Naturalmente, ese reparto entre los solicitantes de mayor puntuación (20 puntos) agotó ya las 387 Has. autorizables, por lo que los interesados con menor puntuación (esto es, cualquiera que no fuera *joven nuevo viticultor*) no pudo ya obtener autorización alguna, sencillamente porque no había más superficie disponible.

La misma circunstancia habría de producirse en el **año 2017**, cuando la superficie autorizable fue de 645 Has. (conforme a la Resolución de 24 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, BOE del 30). Sólo los interesados incluidos en el *Grupo 1* ya solicitaron mucha más superficie plantable que la total disponible, por lo que, a cada uno de ellos, en aplicación de la *regla de prorrata*, se les otorgó un 32,11465383% de la superficie admisible solicitada, mientras que a los interesados con menor puntuación no se les concedió autorización alguna.

B) Expuesto lo que antecede, estamos ya en condiciones de afirmar: **i)** primero, que, de acuerdo con el marco normativo que debió regir los actos cuya revisión se pretende, el requisito de la *puntuación suficiente* es, sin duda, *esencial* para que cualquier solicitante de una autorización de nueva plantación fuera adjudicatario de la misma; y **ii)** segundo, que para obtener esa *puntuación suficiente*, es preciso reunir todas las condiciones que hacen a un solicitante merecedor de la condición de *joven nuevo viticultor*, y, con ello, la

de tener la condición de *jefe de explotación*, entendida tal noción como la de *ser titular de una explotación agrícola, real y efectiva, cuya titularidad entrañe, para el solicitante, materialmente, el riesgo empresarial inherente a la actividad de producción vitícola*.

Pues bien, con arreglo a los parámetros interpretativos descritos en el apartado 1 de este Fundamento de Derecho, parece poco discutible que el requisito de la puntuación suficiente (y, con él, el de reunir los requisitos necesarios para ser considerado *joven nuevo viticultor*) debe reputarse *esencial* para la adquisición del *derecho o facultad* que el otorgamiento de la autorización entraña.

Y es que, si, como hemos expuesto con anterioridad, *requisitos esenciales* serían los que *explican y justifican la adquisición del derecho o facultad de que se trate*, o, si se prefiere, aquellos con cuya concurrencia el legislador quiere asegurar el cumplimiento de los fines perseguidos por una norma y la tutela de los intereses fundamentales que con ella se protegen o promueven; es evidente que la exigencia de que el solicitante de una nueva plantación tenga puntuación suficiente (y para ello, que tenga la condición de *joven nuevo viticultor*) entra dentro de la definición de *requisito esencial*, como hemos indicado, por todos, en nuestro dictamen D.45/17.

Por lo pronto, atendiendo al *objeto, causa y fin del acto*, debe repararse en que las Resoluciones cuya revisión se pretende son actos administrativos de *naturaleza autorizatoria*, que exoneran al interesado de una prohibición, la de plantar vides, que el ordenamiento jurídico impone y configura como general; y que tales Resoluciones se dictaron en procedimientos que son de *concurrencia competitiva*, en la medida en que, ante lo limitado de la superficie total autorizable, el otorgamiento de las autorizaciones había de regirse por criterios de prelación o prioridad, que excluyen (por mera inexistencia de superficie plantable) a quienes carezcan de puntuación bastante.

Y, por otro lado, la *finalidad perseguida* por la norma es clara: en los supuestos en que haya más superficie solicitada que superficie disponible, hay que poner en juego *criterios de prioridad o prelación*, que se establecen en la medida en que privilegian o priman a unos solicitantes respecto a otros (los *jóvenes nuevos viticultores*, en este caso), por razón de las circunstancias objetivas que concurran en ellos, y que se justifican en función de las directrices y orientaciones de política agraria que España, como Estado miembro de la UE, ha definido.

En este caso, como se ha expuesto, el Reino de España ha optado por establecer preferencia en la adjudicación de las nuevas superficies plantables a los *jóvenes nuevos viticultores*.

C) Explicado lo anterior y examinado el expediente remitido a este Consejo Consultivo, cabe concluir, como hace la Consejería tramitadora, que la persona solicitante

carecía, en realidad, de la condición de *jefe de explotación*, pues no era titular de una explotación agraria, material y efectiva, cuyo riesgo empresarial asumiera. Por ello mismo – lo adelantamos ya- dicha persona carecía del *requisito esencial* que le hubiera permitido ser adjudicataria de la autorización para plantar viñedo que le fue otorgada por las Resoluciones cuya revisión se pretende, las cuales, por la ausencia de tal *requisito esencial*, incurrían en la causa de nulidad descrita por el art. 47.1.f) LPAC'15.

Como no podía ser de otro modo, la realidad material subyacente ha tenido que ser desentrañada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de la acumulación de un conjunto de hechos indiciarios, pues el interesado creó artificialmente las condiciones para aparentar su condición de *jefe de explotación*.

En este sentido, debe recordarse que, en nuestro Derecho, las presunciones son un medio apto para la prueba de los hechos jurídicamente relevantes, de conformidad con los arts. 385 y 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (también en el ámbito de los procedimientos administrativos, ex art. 77.1 LPAC'15), requiriendo tal medio probatorio que, además de la prueba plena de los hechos-indicio, exista, entre éstos y los hechos presuntos, un *enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano* (art. 386 LECiv y, por todas, Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2016; R. cas. núm. 1740/2015).

En palabras de la Sentencia, de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 29 de mayo de 2014 (Rec. 103/2013), *la prueba de presunciones es perfectamente apta para descubrir un fraude de ley como el detectado, pues no puede exigirse la prueba directa de lo que pretende ocultarse, ya que es difícilmente imaginable que muestre al exterior y sin disimulo sus acciones quien realiza actividades que la legalidad no ampara.*

4. Indicios expresivos de la falta de requisitos esenciales en el presente caso

A) El expediente revisor que se nos ha remitido acredita los hechos indiciarios creados artificialmente por la persona interesada para aparentar que reúne los requisitos esenciales exigidos por la normativa vigente. En concreto, tales indicios son descritos y analizados, pormenorizadamente, en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto de la Propuesta de resolución, de la Secretaría General Técnica, de 18 de julio de 2018, a la que este Consejo se remite para evitar inútiles repeticiones. Sucintamente expuestos, son los siguientes:

-La persona interesada tiene 30 años. Según resulta del expediente, no reside en España, sino en una ciudad australiana. Así consta, según sus propias manifestaciones, en el documento de apoderamiento, otorgado, el 30 de septiembre de 2016, ante el Cónsul General de España en Sidney (Australia), en el que la persona interesada manifiesta tener su domicilio en la ciudad de Summer Hill

(Nueva Gales del Sur); y conferir poder general en favor de su madre. La persona interesada no ha desmentido ese dato en sus alegaciones presentadas el 11 de julio de 2018

-Además, según la información obtenida por la Consejería actuante en internet, en dicha ciudad australiana, la persona solicitante desarrolla una actividad comercial. En esta misma línea, en sus alegaciones presentadas el 11 de julio de 2018, la propia persona solicitante afirma que, como muchos otros jóvenes, ha tenido que *“emigrar al extranjero a buscarnos la vida.”*

-Parece razonable concluir que el hecho de residir y tener una actividad económica en Australia resulta incompatible con ejercer, de modo efectivo, la jefatura de una explotación agrícola en España.

-La explotación de la persona solicitante (explotación no catalogada como prioritaria) surge en el año 2016, coincidiendo con la tramitación del primer procedimiento de autorización de nuevas plantaciones, con una superficie de 59,0631 Has. De esa superficie, la mayoría (40,2409 Has, unas dos terceras partes de la superficie total) corresponde a barbecho tradicional; y el resto a trigo blando (3,3439 Has), olivo (0,4039 Has), cebada (2,1266 Has), almendros (2,0075 Has), esparceta (9,3000 Has), nogal (0,2 Has), espárragos (0,60 Has) y nectarinas (0,1696 Has).

-En el año 2017, la explotación, se redujo a menos de la mitad (24,12 Has); y en junio de 2018 (fecha de la emisión del informe de recomendaciones elaborado por la Consejería de Agricultura), a 13,84 Has, de las que 5,024 Has corresponde al viñedo que le fue autorizado en el año 2016, y que fue plantado -según las comunicaciones remitidas por la interesada a la Consejería de Agricultura el 4 de junio de 2018- en mayo de 2018.

-La superficie integrada en la explotación no es propiedad de la persona solicitante, sino que procede, íntegramente, de seis contratos de arrendamiento. Cinco de ellos fueron suscritos por la persona interesada en enero de 2016 (fecha inmediatamente anterior a la participación de la persona interesada en el procedimiento de nuevas plantaciones de ese año) y liquidados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el mes de abril de 2016. Un sexto contrato, cuya fecha no consta, fue liquidado en abril de 2017, por lo que tuvo que suscribirse coincidiendo en el tiempo con la participación de la persona interesada en el procedimiento correspondiente a 2017, o de forma inmediatamente anterior.

-Todos esos contratos prevén una duración de cinco años, tras los cuales la disponibilidad de las fincas (ahora con sus correspondientes autorizaciones de plantación) retornaría a los arrendadores, por lo que la pérdida de disposición del arrendador puede calificarse como puramente aparente. Dado el tiempo de que dispondría la persona solicitante para ejecutar la plantación (hasta tres años) y el necesario para que las vides alcancen un estado productivo (al menos dos), no parece que el tiempo de duración de los contratos permita una explotación mínimamente prolongada en el tiempo del viñedo que llegara a plantarse.

-Todos los contratos prevén una renta de 30 euros/Ha, que la Propuesta de resolución califica como notablemente inferior a la de mercado. Los Servicios Jurídicos, en su informe de 6 de septiembre de 2018, indican que, según las estadísticas del MAGRAMA, los precios medios del arrendamiento ascienden, en La Rioja, y, en 2016, a unos 144 euros/Ha para tierras de secano.

-En todos los contratos, los arrendadores son personas unidas por vínculos familiares cercanos con la persona solicitante: su madre, su abuela, un tío y dos hermanos de un abuelo. Además, todos ellos son mayores de cuarenta años y titulares ya de viñedo inscrito, lo que les impedía acceder al reparto de nuevas superficies de viñedo.

-Estas circunstancias apuntan a una voluntad de incrementar ficticiamente la superficie disponible; ya que, cuanto mayor sea la superficie solicitada por una persona interesada, mayor será, por aplicación de la regla de prorrata del art. 11 RD 740/2015, la superficie plantable que se le conceda.

-La persona interesada carece de maquinaria agrícola (ninguna figura inscrita a su nombre en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola), elemento material imprescindible para la producción vitícola y que, cabalmente, constituye uno de los que necesariamente debe formar parte del conjunto organizado de bienes y derechos que conforma toda explotación agrícola, tal como la define el art. 2.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias; ausencia tanto más llamativa cuanto que la explotación de la que la persona interesada dice ser titular tiene más de 59 Has de superficie en 2016; y de más de 24 Has. en 2017.

-La explotación carece de Cuaderno de explotación (CUEX) en el año 2016 -año en el que surge la explotación- lo que resulta llamativo tratándose de una explotación con una superficie declarada de casi 60 Has.

-La explotación no está inscrita en ningún Registro específico o relativo a marca de calidad (Registro de Producción Integrada, Registro de Agricultura ecológica u otros), con excepción de la DOCR, en la que se inscribe, precisamente, a raíz de la obtención en 2016 de la autorización a plantar más de 5 Has de viñedo, que fueron efectivamente plantadas en mayo de 2018.

-La persona solicitante no tiene formación para aplicar productos fitosanitarios, lo que no parece coherente con el hecho de ser titular de una explotación con una superficie tan elevada.

-Se aprecia una desproporción evidente entre el supuesto tamaño de la explotación (más de 59 Has en el año 2016 y más de 24 en el 2017) y sus resultados económicos de los ejercicios 2016 y 2017.

-La persona solicitante (cuya supuesta explotación es improductiva) no ha acreditado en el expediente una solvencia económica que pueda considerarse suficiente como para ejecutar la plantación inicialmente pretendida, resultando evidente la “desproporción” entre el proyecto empresarial que pretende acometer, y los medios e infraestructura de los que dispone. Por otro lado, tampoco consta que haya solicitado ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, a pesar de su edad (30 años).

-En cuanto a la actividad generada por su explotación, todas las facturas de ingresos y gastos que presenta la persona interesada son posteriores al procedimiento de nuevas plantaciones correspondiente al año 2016.

-Por lo que hace a los ingresos del ejercicio 2016, estos suman unos 2.500 euros por tres únicas facturas. Dos, por venta de 500 kg de almendra (la explotación declara a lo largo de 2016 más de 2 Has de almendra, pero sólo aparecen cultivadas 0,25 Has); y 1800 euros por la venta de esparceta a una persona que es su tío abuelo y arrendador de 5 Has.

-En cuanto a los gastos, presenta una factura de combustible (por importe de 546,16 euros), que sería el “*resumen del consumo agrario durante todo el año 2016*” según la propia persona interesada. Sin embargo, su explotación carece de maquinaria propia y el vehículo al que correspondería ese combustible (según lo identifica la persona interesada en sus alegaciones) se encuentra dado de baja desde el año 2002.

-Como únicos gastos adicionales se aportan tres facturas por compra de abono (una) y material vegetal (dos), por importe total inferior a 1.300 euros.

-Correspondientes al año 2017, la persona interesada presentó inicialmente las mismas facturas que ya había aportado en relación con el ejercicio 2016, salvo tres más, todas de escasa cuantía: dos, de gastos, por 241,11 euros y 290,40 euros, respectivamente; y, una, de ingresos, por 399,99 euros.

-En sus alegaciones, en el curso del procedimiento revisor, aportó facturas adicionales, correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018. Las relativas a los años 2017 están constituidas por cuatro facturas por venta de almendra, que no alcanzan 900 euros; y siete relativas a supuestos gastos, por importe total aproximado de 2.600 euros.

-Las facturas atinentes a 2018 son sólo de gastos, que no alcanzan 900 euros (cifra muy escasa, más aun teniendo en cuenta que en el año 2018 ejecutó la plantación a que había sido autorizada en 2016). No aporta factura que acredite ningún ingreso.

-En definitiva, el análisis de la facturación de la explotación, durante sus ya tres años de existencia formal, revela una clara desproporción entre su superficie declarada y lo escaso de sus cifras de gastos y, sobre todos, de ingresos.

-No consta que la persona solicitante tenga suscrito ningún seguro agrario para las campañas 2016 y 2017. Tampoco tiene cursos de formación inscritos en el REA.

-La persona interesada no ha acreditado haber solicitado su alta en el Régimen correspondiente de Seguridad Social (ante la TGSS), ni tampoco ha aportado informe oficial acreditativo de su vida laboral. En cuanto a la declaración censal de alta en actividades económicas (ante la AEAT), figura dada de alta en el Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, a efectos del IVA, desde el 1 de enero de 2016 (actividad que, llamativamente, se declara como “*actividad no económica*”), dato que contrasta con el hecho de que, en el año 2016, se encuentra residiendo en Australia.

-Buena parte de los documentos, comunicaciones y solicitudes formuladas en nombre de la persona interesada han sido suscritos o por su madre (acuses de recibo de notificaciones, solicitud correspondiente al año 2017) o por su tío (aportación de documentación en contestación al requerimiento formulado por la Consejería de Agricultura el 28 de febrero de 2018).

B) Cada una de estas circunstancias, aisladamente considerada, tal vez pudiera encontrar una justificación razonable; pero, a juicio de este Consejo, la concurrencia cumulativa de todas ellas en un mismo supuesto de hecho sólo puede obedecer (sin explicación alternativa lógica posible) al propósito de aparentar, ficticia o artificialmente, la existencia de las condiciones (titularidad de una explotación agrícola) que permitieran la obtención de una autorización para plantar grandes superficies de viñedo por el solicitante; cuando éste, en la realidad material de las cosas, carece de los *requisitos esenciales* para ello, pues no es titular de una, verdadera y efectiva, explotación agrícola; propósito al que, según se desprende del expediente, se añadiría el de que buena parte de esas autorizaciones acaben siendo disfrutadas, material y efectivamente, por quienes, siendo titulares de explotaciones agrícolas, no habrían podido ser adjudicatarios de esas

autorizaciones, por no cumplir los requisitos y criterios de prioridad establecidos en el nuevo régimen normativo a cuyo amparo aquellas se adjudicaron.

Este efecto es obvio que debe evitarse, pues, conforme al art. 6.4 del Código civil, los actos realizados al amparo del texto de una norma, y que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán realizados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

En este caso, además, la imposibilidad para la persona solicitante de obtener la puntuación suficiente es absoluta; pues, para ser considerado *joven viticultor*, es necesario ser, realmente, el titular de una explotación y asumir, como tal, el riesgo empresarial propio de la misma; condición que la persona interesada no cumplía en el momento de tomar parte en el procedimiento autorizatorio tramitado en el año 2016 (tampoco al hacerlo en el correspondiente al año 2017), en cuyo seno se dictaron las Resoluciones de autorización administrativa cuya revisión de oficio se pretende.

En fin, como se ha señalado ya, estas Resoluciones producen un resultado radicalmente contrario al buscado por las normas a cuyo amparo se dictaron, resultado que se concreta en otorgar autorizaciones para plantar viñedo que se abstraen de una aplicación, correcta y efectiva, de los criterios de prioridad, y que permiten, en definitiva, la adquisición de derechos a quien carece de las condiciones, objetivas y subjetivas, que el ordenamiento jurídico ha establecido como esenciales y determinantes para beneficiarse de la autorización a plantar las nuevas superficies cultivables.

En consecuencia, las referidas Resoluciones deben considerarse nulas de pleno Derecho, de acuerdo con el art. 47.1.f) LPAC'15 y con su antecedente, el art. 62.1.f) LPAC'92.

Tercero

Sobre actuaciones administrativas conexas

1. La Resolución de 25 de junio de 2018, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, incluye, entre las actuaciones administrativas cuya revisión se pretende, todos los asientos que se hayan practicado en el Registro riojano de viñedo, derivados de las Resoluciones de autorización de plantación comprendidas en el Fundamento Jurídico Noveno de la Propuesta de resolución de 18 de julio de 2018.

A este respecto, mantenemos, como ya hiciéramos en diversos dictámenes anteriores (cfr, por ejemplo, nuestro dictámenes D.28/18, D.29/18, D.57/18, D.64/18, D.68/18, D.73/18 y D.86/18, entre otros muchos) que resulta obvio que una hipotética declaración

de nulidad de las Resoluciones de autorización de plantación (en este caso, las de fechas 4 de julio y 4 de noviembre de 2016, y 3 de julio de 2017), habrá de dar lugar a la cancelación de los asientos que se hayan practicado, en coherencia con lo dispuesto por el art. 14.1 del Decreto 4/2017, de 3 de febrero, a cuyo tenor *la modificación del Registro de Viñedo se hará por la finalización de los procedimientos administrativos regulados en la normativa de potencial vitícola de los que deriven una modificación de los datos inscribibles en el Registro de viñedo*.

2. Por otra parte, el punto segundo de la Propuesta de resolución de 18 de julio de 2018 propone declarar como viñedo no inscrito e instar el arranque de la plantación ejecutada por la persona interesada en virtud de las autorizaciones cuya nulidad radical nos ocupa.

A estos efectos, es de tener en cuenta que el art. 10.1 de la Ley 1/2017, de 2 de enero, de Control del potencial vitícola en la CAR, establece que: *“la nulidad de autorizaciones de plantación declaradas previa tramitación de un procedimiento de revisión de oficio implicará la obligación de arranque”*.

Por lo cual, procede entender que la expresada plantación y los asientos de Registro de viñedo que la reflejan, en cuanto que traen causa de las Resoluciones cuya nulidad se pretende, deben quedar también afectadas por la resolución final que se adopte en este procedimiento de revisión de oficio, mediante la oportuna incoación del procedimiento de arranque.

Así lo hemos señalado, entre otros en nuestros dictámenes D.12/18, D.19/18, D.29/18 y D.42/18, al afirmar o reconocer la competencia del titular de la Consejería actuante para avocar la competencia administrativa precisa para declarar la ilegalidad e instar el arranque de plantaciones de viñedo ilegales en cuanto que derivadas de actos administrativos que sean revisables de oficio por incurrir en alguna causa de nulidad de pleno Derecho.

CONCLUSIONES

Única

Procede la revisión de las Resoluciones administrativas de 7 de julio de 2016 y 17 de noviembre de 2016, por concurrir en ellas la causa de nulidad de pleno Derecho comprendida en el apartado f) del artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC'15).

Este es el Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja que, para su remisión conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero, expido en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Joaquín Espert y Pérez-Caballero